

RESOLUCION N. 05632

“POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En ejercicio de sus facultades conferidas mediante la Resolución No. 01865 de 2021 modificada por la Resolución 00046 de 13 de enero de 2022 de la Secretaría Distrital de Ambiente, en concordancia con el Acuerdo Distrital 257 de 2006, modificado parcialmente por el Acuerdo Distrital 546 de 2013 el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, modificado por el Decreto Distrital 175 de 2009, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 99 de 1993, el Decreto 1594 de 1984, el Decreto 01 de 1984 y

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

Que el personal técnico de la Dirección de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente llevó a cabo visita técnica el día 18 de octubre de 2007 al establecimiento de comercio **LUBRICANTES LA 76** con Nit. 3084486-7, ubicado en la Carrera 76 No. 72 A - 03 de la localidad de Engativá de esta ciudad, con el fin de evaluar la situación ambiental y las condiciones de operación en el manejo de vertimientos industriales, consignando los resultados en el **Concepto Técnico No. 15500 de 27 de diciembre de 2007**, estableciendo que el establecimiento de comercio no cumple con los requisitos exigidos por la norma, en especial por el requerimiento SAS 40436 de 07 de diciembre de 2006, para mitigar el impacto que sobre el ambiente pueda estar generando la actividad desarrollada de lavado de vehículos, por carecer de la infraestructura necesaria para prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental creados por los vertimientos generados en el ejercicio de tal actividad.

Que, de acuerdo al concepto técnico en mención, la Dirección Legal Ambiental mediante la **Resolución No. 4175 de 22 de octubre de 2008** impuso medida preventiva consistente en suspensión de actividades de lavado de vehículos al establecimiento de comercio **LUBRICANTES LA 76** con Nit. 3084486-7, en cabeza del señor **URIAS BUSTOS CASTRO** identificado con cédula de ciudadanía **No. 3.084.486**, en su calidad de representante legal del establecimiento en cita, o de quien haga sus veces, ubicado en la Carrera 76 No. 72 A - 03 de la localidad de Engativá de esta ciudad.

Que el anterior acto administrativo fue notificado al señor **URÍAS BUSTOS CASTRO** identificado con cédula de ciudadanía **No. 3.084.486**, propietario del establecimiento de comercio **LUBRICANTES LA 76** con Nit. 3084486-7, el día 04 de mayo de 2009, quedando ejecutoriado el día 05 de mayo de 2009.

Que mediante la **Resolución No. 4176 de 22 de octubre de 2008** la Dirección Legal Ambiental inició investigación administrativa sancionatoria y formuló cargos en contra del establecimiento **LUBRICANTES LA 76** con Nit. 3084486-7, en cabeza del señor **URÍAS BUSTOS CASTRO** identificado con cédula de ciudadanía **No. 3.084.486**, o de quien haga sus veces, por la presunta violación a la normatividad ambiental vigente en materia de vertimientos industriales.

Que el anterior acto administrativo fue notificado al señor **URÍAS BUSTOS CASTRO** identificado con cédula de ciudadanía **No. 3.084.486**, propietario del establecimiento de comercio **LUBRICANTES LA 76** con Nit. 3084486-7, el día 04 de mayo de 2009, quedando ejecutoriado el día 05 de mayo de 2009.

Que mediante el **Auto No. 0413 de 15 de enero de 2010** la Dirección de Control Ambiental abrió a pruebas dentro de la investigación ambiental iniciada por el Departamento Administrativo del Medio Ambiente –DAMA, hoy Secretaría Distrital de Ambiente –SDA, contra el señor **URÍAS BUSTOS CASTRO** identificado con cédula de ciudadanía **No. 3.084.486**, propietario del establecimiento de comercio **LUBRICANTES LA 76** con Nit. 3084486-7, ubicado en la Carrera 76 No. 72 A - 03 de la localidad de Engativá de esta ciudad.

Que el anterior acto administrativo fue notificado al señor **URÍAS BUSTOS CASTRO** identificado con cédula de ciudadanía **No. 3.084.486**, propietario del establecimiento de comercio **LUBRICANTES LA 76** con Nit. 3084486-7, el día 02 de septiembre de 2010, quedando ejecutoriado el día 03 de septiembre de 2010.

Que la Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo realizó revisión en el **Registro Único Empresarial y Social - RUES** evidenciando que la matrícula mercantil **No. 01488027** del señor **URÍAS BUSTOS CASTRO** identificado con cédula de ciudadanía No. 3.084.486, se encuentra cancelada desde el día 12 de julio de 2015.

Que una vez revisado el expediente **SDA-05-2000-2134**, se observó que no existe actuación sancionatoria posterior por parte de esta autoridad ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación a proceder.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1. Fundamentos Constitucionales

Que la regulación Constitucional de los recursos naturales en Colombia se estructura a partir de la duplicidad del concepto de protección, el cual es atribuido al Estado y a los particulares como lo describe el artículo 8° de la Carta Política, el cual señala expresamente que *“Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”*.

Que el artículo 58 de la Constitución establece que la propiedad es una función social que implica obligaciones y que, como tal, le es inherente una función ecológica.

Que así mismo, el artículo 79 de la Carta consagra el derecho a gozar de un ambiente sano, estableciendo que es deber del Estado la protección de la diversidad e integridad del ambiente, la conservación de las áreas de especial importancia ecológica y el fomento de la educación para el logro de estos fines.

Que esta obligación comprende elementos como la planificación y control de los recursos naturales, con el fin de asegurar su desarrollo sostenible, conservación, restauración y sustitución; en tanto que su función de intervención, inspección y prevención se encamina a precaver el deterioro ambiental, a hacer efectiva su potestad sancionatoria, y exigir a manera de compensación los daños que a éstos se produzcan, tal y como lo establece el artículo 80 Constitucional.

2. Fundamentos Legales

El artículo 66 de la Ley 99 de 1993, consagró las competencias de los grandes centros urbanos, estableciendo:

“(...) Los municipios, o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano. Además de las licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que les corresponda otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de su jurisdicción, las autoridades municipales, distritales o metropolitanas tendrán la responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación.”

Por otra parte, el párrafo 3º del artículo 85 de la Ley 99 de 1993 señala que: *“Para la imposición de las medidas y sanciones a que se refiere este artículo se estará al procedimiento previsto por el Decreto 1594 de 1984 o al estatuto que lo modifique o sustituya.”*

Con lo anteriormente expuesto, resulta evidente que el legislador para la iniciación y desarrollo de los procedimientos sancionatorios derivados de la infracción a las disposiciones en materia ambiental quiso unificar su criterio y orientar su desarrollo procesal a través de un mecanismo o norma de carácter especial.

Que el inciso 2º del artículo 107 de la Ley 99 de 1993, señala:

*“(...) **ARTÍCULO 107.-** (...) Las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares*

Que, en relación con la actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio, iniciada mediante la **Resolución No. 4176 de 22 de octubre de 2008** y surtida dentro del expediente **SDA-05-2000-2134**, contra el señor **URÍAS BUSTOS CASTRO** identificado con cédula de ciudadanía No. 3.084.486, propietario del establecimiento de comercio **LUBRICANTES LA 76** con Nit. 3084486-7, ubicado en la Carrera 76 No. 72 A - 03 de la localidad de Engativá de esta ciudad, este Despacho considera tener en cuenta los siguientes aspectos:

3. Normativa procedimental

Que el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 establece que: *“Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.”*, por lo cual y para el caso en concreto se deberá dar aplicación del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), por cuanto el presente trámite se inició estando en vigencia dicha norma.

En ese orden de ideas, la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, también se permitió señalar:

*“(…) **ARTICULO 64: TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS.** El procedimiento dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con el procedimiento del Decreto 1594 de 1984.”*

Lo anterior, significa que dado que, en el presente proceso sancionatorio ambiental, se inició a través de la **Resolución No. 4176 de 22 de octubre de 2008**, dicho proceso debe ser resuelto de conformidad al procedimiento del Decreto 1594 de 1984.

El Decreto 1594 de 1984, define el proceso sancionatorio en los artículos 197 y siguientes, no obstante, dicho régimen no contiene la figura de la caducidad administrativa, razón por la cual y, frente al vacío de la norma, nos remitimos a lo dispuesto en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), el cual señala:

*“(…) **ARTICULO 38:** Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones; caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas”.*

Al respecto, el H. Consejo de Estado, reiteró su posición, mediante providencia del 23 de junio de 2000, expediente 9884, Magistrado ponente Dr. Julio E. Correa Restrepo, donde se precisó:

“(…) Pues bien, el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, norma aplicable al presente caso, es claro en disponer que, salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que puede ocasionarlas, por lo tanto, el término se debe contar a partir del momento en que se produce el hecho infractor.” (Resaltado fuera del texto original).

Que respecto al término establecido en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, se han expuesto tres tesis en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C., impartió directrices a las entidades y organismos Distritales, a través de la Directiva No. 007 de noviembre 09 de 2007, en la que señaló lo siguiente:

*“(...) Como se observa, han sido diversas las tesis expuestas en relación con el tema objeto de este documento, sin que hasta la fecha se haya generado una única línea jurisprudencial, razón por la cual se hace necesario impartir las siguientes instrucciones en cuanto al término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración: “ (...) *Teniendo en cuenta que no existe una posición unificada de la Jurisdicción Contencioso Administrativa frente a la interrupción del término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración, y que la administración debe acatar el criterio que desde el punto de vista del análisis judicial genere el menor riesgo al momento de contabilizar dicho término, se recomienda a las entidades Distritales que adelanten actuaciones administrativas tendientes a imponer una sanción, que acojan en dichos procesos la tesis restrictiva expuesta por el Consejo de Estado, es decir, aquella que indica que dentro del término de tres años señalado en la norma en comento, la administración debe expedir el acto principal, notificarlo y agotar la vía gubernativa⁶(...)” (subrayado fuera de texto).*

Dicho lo anterior, del texto del artículo 38 del C.C.A. (Decreto - Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que la administración, disponía **de un término de tres (3) años contados a partir del momento en que tuvo conocimiento de los hechos, es decir, desde el día 27 de diciembre de 2007 fecha de la visita técnica en la cual se evidenciaron los incumplimientos en materia ambiental**, no solo para expedir el acto administrativo que resuelve de fondo, sino para que el mismo quedara ejecutoriado conforme a lo dispuesto en el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo, para adquirir sus efectos; por lo tanto y en el caso que nos ocupa, es evidente que ha transcurrido más de tres (3) años, sin que se haya resuelto de fondo el proceso administrativo sancionatorio.

Conforme a lo anterior, esta autoridad encuentra que el asunto bajo examen reúne las exigencias establecidas en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, por cuanto la autoridad ambiental contaba con tres (3) años, para pronunciarse de fondo en la presente investigación, situación que no ocurrió y por ello ha operado el fenómeno de la caducidad de la facultad sancionatoria.

Dicho así, este Despacho considera procedente resolver de fondo el trámite administrativo sancionatorio iniciado mediante la **Resolución No. 4176 de 22 de octubre de 2008**, contando con las herramientas necesarias para entrar a decidir y declarar la caducidad de la acción sancionatoria promovida en contra del citado usuario.

4. De la Medida Preventiva Impuesta

Respecto a la medida preventiva de suspensión de actividades, impuesta en el artículo primero de la **Resolución No. 4175 de 22 de octubre de 2008**, esta entidad se permite aclarar que siendo que operó el fenómeno de la caducidad respecto del proceso sancionatorio ambiental, de igual

forma deberá sanearse la medida preventiva, por lo cual esta autoridad ambiental, considera procedente decretar la pérdida de la fuerza ejecutoria sobre la Resolución que la impuso al establecimiento de comercio **LUBRICANTES LA 76** con Nit. 3084486-7, en cabeza del señor **URÍAS BUSTOS CASTRO** identificado con cédula de ciudadanía **No. 3.084.486**, en su calidad de propietario del establecimiento en cita, o de quien haga sus veces, ubicado en la Carrera 76 No. 72 A - 03 de la localidad de Engativá de esta ciudad, consistente en la suspensión de las actividades de lavado de vehículos.

Que, de la información que reposa en el expediente **SDA-05-2000-2134**, se establece que, del objeto dispuesto en la mencionada Resolución, no se realizaron actuaciones administrativas tendientes a su ejecución, por ende, sobre los mismos ya no procede actuación alguna. Razón por la cual se hace necesario evaluar si el citado acto administrativo se encuentra incurso en la causal tercera del artículo 91 de la ley 1437 de 2011, el cual indica:

“(...) Artículo 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:

- 1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.*
- 2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.*
- 3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.*
- 4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.*
- 5. Cuando pierdan vigencia. (...)” (Negrilla fuera de texto)*

La validez de un acto administrativo es un fenómeno de contenidos y exigencias en derecho para la estructuración de la decisión administrativa y la eficacia por su parte, es una consecuencia del acto administrativo que lo hace capaz de producir los efectos jurídicos para los cuales se expidió y a diferencia de la validez se proyecta al exterior del acto administrativo en búsqueda de sus objetivos y logro de sus finalidades.

Se puede presentar que una vez expedido el acto administrativo pueden darse fenómenos que alteren su normal eficacia, los cuales son conocidos dentro de nuestra legislación como eventos de pérdida de fuerza ejecutoria, dispuestos en el artículo 91 de la ley 1437 de 2011.

Concluyendo de esta manera, se pudo observar la configuración de una causal de la normatividad anteriormente citada, ya que transcurrieron más de 5 años de la emisión de la **Resolución No. 4175 de 22 de octubre de 2008**, sin que la administración realizara los actos que le correspondían para ejecutarla; adicionalmente el fin perseguido por la medida preventiva, respecto de las actividades de lavado de vehículos, ya ha sido superada, por ende desaparecieron sus fundamentos de hecho, quedando así en evidencia que ha operado la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo por la causal establecida en el numeral 3 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011.

Vale resaltar, que la pérdida de fuerza de ejecutoria no supone que se dude de la validez del acto administrativo sobre el cual recae ésta, sino que establece la pérdida de capacidad de ejecutoriedad del acto, por lo cual no puede generar efectos jurídicos a futuro, tal como lo ha manifestado en la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia del 18 de febrero de 2010 (Consejero ponente, Enrique Gil Botero, No. 11001-03-26-000-2007-00023-00(33934)), en la cual señala que “(...) Este fenómeno constituye una vicisitud que afecta la eficacia del acto administrativo y no su validez, de allí que ya no es posible hacer cumplir su contenido por haber desaparecido su carácter obligatorio.(...)”

III. DEL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE

Que, al referir la procedencia del archivo de un expediente y/o actuación administrativa, es preciso aclarar que el Código de Procedimiento Civil (Decreto 1400 de 1970), fue derogado por el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), el cual entró en vigor íntegramente desde el primero (01) de enero de 2016 (Acuerdo No. PSAA15-10392 del 1 de octubre de 2015 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).

Que, en este orden de ideas, el artículo 122 del Código General del Proceso, formación y archivo de los expedientes establece entre otras cosas que: “(...) El expediente de cada proceso concluido se archivará (...)”

Que, de conformidad con los documentos que obran en el expediente **SDA-05-2000-2134**, y valorando las circunstancias fácticas del presente caso, se observa que sobre el **Auto No. 0413 de 15 de enero de 2010**, no se llevaron a cabo actuaciones posteriores, así mismo, se observa que en el expediente no se continúan adelantando las actuaciones de seguimiento y control.

En consecuencia y de acuerdo con lo expuesto, considera esta autoridad que, con el fin de evitar congestión innecesaria que conlleve un desgaste administrativo y actuando bajo lo establecido en la normatividad desarrollada en este acto administrativo, se disponga el archivo del expediente **SDA-05-2000-2134** y sus actuaciones inmersas, dando aplicación a los principios orientadores del derecho administrativo, específicamente al principio de eficacia y economía es procedente disponer igualmente el archivo definitivo del expediente antes mencionado.

IV. COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Mediante Acuerdo 257 de 30 de noviembre de 2006, “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá Distrito Capital y se expiden otras disposiciones”, ordenó en su artículo 101, Transformar el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente -DAMA, en la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, como un organismo del sector central, con autonomía administrativa y financiera.

Que el Acuerdo Distrital 546 del 27 de diciembre de 2013, modificó parcialmente el Acuerdo Distrital 257 del 30 de noviembre de 2006.

Por su parte el Decreto 109 de 16 de marzo de 2009, modificado por el Decreto 157 de 23 de abril de 2009, estableció la nueva estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente, determinó las funciones de sus dependencias y dictó otras disposiciones.

Que, de igual forma, en los numerales 6° y 7° del artículo segundo de la Resolución No. 01865 de 06 de julio de 2021 modificada por la Resolución 00046 de 13 de enero de 2022, la Secretaría Distrital de Ambiente delegó en la Dirección de Control Ambiental, entre otras funciones, la de:

“(…) 6. Expedir los actos administrativos que declaran la caducidad administrativa en los procesos sancionatorios.

7. Expedir los actos administrativos que, de oficio o a petición de parte, declaran o niegan, la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos emitidos dentro de los procesos sancionatorios (…).”

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR la caducidad de la facultad sancionatoria que tiene la Secretaría Distrital de Ambiente en el proceso sancionatorio adelantado en contra del señor **URÍAS BUSTOS CASTRO** identificado con cédula de ciudadanía **No. 3.084.486**, propietario del establecimiento de comercio **LUBRICANTES LA 76**, ubicado en la Carrera 76 No. 72 A - 03 de la localidad de Engativá de esta ciudad, iniciado mediante la **Resolución No. 4176 de 22 de octubre de 2008**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DECLARAR la pérdida de fuerza de ejecutoria de la **Resolución 4175 de 22 de octubre de 2008**, por medio de la cual se impuso medida preventiva consistente en suspensión de actividades de lavado de vehículos, al establecimiento de comercio **LUBRICANTES LA 76**, ubicado en la Carrera 76 No. 72 A - 03 de la localidad de Engativá de esta ciudad, de propiedad del señor **URÍAS BUSTOS CASTRO** identificado con cédula de ciudadanía **No. 3.084.486**, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor **URÍAS BUSTOS CASTRO** identificado con cédula de ciudadanía **No. 3.084.486**, en la **Carrera 76 No. 72 A - 03** de la localidad de Engativá de esta ciudad, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO CUARTO. - Comuníquese al Procurador delegado para Asuntos Judiciales Ambientales y Agrarios el presente acto administrativo.

ARTÍCULO QUINTO. - Remitir copia de la presente resolución a la Oficina de Control Disciplinario Interno, para los fines pertinentes.


ARTICULO SEXTO. - Ordenar la publicación de la presente providencia en el Boletín ambiental. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEPTIMO. - Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, proceder al **ARCHIVO** de las diligencias sancionatorias contenidas en el expediente **SDA-05-2000-2134**, como consecuencia de las consideraciones señaladas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO OCTAVO. - Contra la presente resolución procede recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente providencia, con el lleno de los requisitos legales previstos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto - Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), en concordancia con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

fecha



RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL

Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Firmó:

Expediente: DM-05-2000-2134
Proyectó SRHS: Giselle Lorena Godoy Quevedo
Revisó SRHS: Carlos Andrés Sepúlveda
Revisó SRHS: Maitte Patricia Londoño Ospina
Aprobó SRHS: Reinaldo Gelvez Gutiérrez